



*José Chamizo de la Rubia
Defensor del Pueblo Andaluz
Defensor del Menor*

La crisis económica protagoniza la vida de nuestra comunidad. Ya lo viene haciendo desde hace tres años y 2011 se ha plasmado como la perfecta evidencia de los malos temores y peores pronósticos. Y así, el Informe del Defensor de este ejercicio relata algunos efectos que la crisis está provocando en numerosas facetas de la realidad andaluza. Una situación generalizada que no puede esconder las miles de historias personales que el Defensor ha recogido durante este duro año. Situaciones que arrastran las secuelas de ejercicios anteriores, pero que se agravan en la medida que van decayendo ayudas o respuestas compensatorias que mitigaban las necesidades de numerosas familias.

Vivimos en un vértigo de discursos y testimonios. Unos proclaman la solemnidad de los análisis macroeconómicos, mientras percibimos en lo inmediato los efectos de pobreza y penuria que se ceban en muchas familias. Adalides de los recortes del déficit público pugnan por acometer sus medidas, mientras se hacen patentes los daños que ya generan estas restricciones en gastos sociales.

Son demasiadas las voces de miedo y fatalidad. La gente permanece ensordecida por las polémicas sin réplica y paralizada por la falta de horizontes creíbles. La situación, con ser grave, no mejora alentando el pesimismo ni condenándonos hacia procesos inevitables de colapso.

La ciudadanía necesita confianza, fuerza para resistir y, desde luego, ilusión para buscar una esperanza de que el futuro será mejor. En esa tarea, el Defensor del Pueblo Andaluz lleva estos mismos años de recesión abogando por el sistema de garantías de protección social. El ajuste del gasto público es una tarea demasiado extensa y compleja como para reducirse a groseros cálculos porcentuales y mecánicas supresiones. Garantizar las necesidades básicas de una población necesitada no está reñido ni con la austeridad y con el buen gobierno. Al contrario; muchas acciones preventivas y de apoyo social son la mejor inversión de normalidad social para el futuro. Y —no lo olvidemos— es la mejor evidencia de comprender el sentido y alcance de un modelo constitucional de Estado Social y Democrático de Derecho que todos, todos, debemos respetar y asumir.

Porque la riqueza de un país también se labra desde el equilibrio social, desde la cohesión y el proporcional esfuerzo colectivo para ayudar a mitigar la crisis. Aprendamos también a cotizar al alza valores como el esmero para la paz y el progreso social. Porque con la crisis, o después de ella, nunca seremos una comunidad fuerte y solvente sin sustentarla sobre una sociedad justa.